
Capítulo IV

Las dos caras de la comunidad internacional



La nueva dinámica internacional impuesta por EE.UU., ha puesto sobre la mesa las diferentes posiciones de los países europeos, así como sus grandes limitaciones políticas y carencias a la hora de reclamar la aplicación de la normatividad internacional en el campo de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, y de revisar las inversiones y los megaproyectos que impulsan en zonas especiales de conflicto y que constituyen una amenaza contra la vida y los territorios de las comunidades.

Dentro de este marco podemos diferenciar tres tipos. En primer lugar, aquellos Estados que han dejado claro su posicionamiento a favor de la salida militar al conflicto y el apoyo sin condiciones de la política de seguridad democrática, en pos de afianzar la inversión de sus empresas transnacionales. En segundo lugar, aquellos que por la presión estadounidense y del mismo gobierno de Colombia, han sacado de sus agendas políticas los cuestionamientos y recomendaciones a la vulneración sistemática de estos derechos fundamentales y las limitaciones al Estado Social de Derecho y la misma democracia, manteniendo una postura de silencio, a veces cómplice, y de no confrontación con el Estado Colombiano. Lo que de alguna manera ha venido a favorecer la implantación de una política de fortalecimiento de las relaciones bilaterales, sobre la base de la asunción de los ejes económicos y de seguridad del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y en tercer lugar, aquellos pocos Estados, que por su bajo nivel de inversión económica y su larga trayectoria en defensa de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, mantienen una

cierta línea de “confrontación” con el Estado colombiano y continúan en la disponibilidad de favorecer futuros procesos de diálogo y de búsqueda de una solución política negociada al conflicto armado.

En consecuencia, el financiamiento de la política social queda fuertemente afectada por el ajuste y la prioridad dada al pago de la deuda externa y por el fortalecimiento de los aparatos de seguridad, ejército, policía y al pago de informantes. Las mujeres, los indígenas, los discapacitados, las comunidades afro colombianas y los desplazados, entre otros, quedan en manos de programas institucionales privados o semiprivados. Los servicios públicos quedan en manos de empresas privadas transnacionales, las cuales por medio de la ejecución de programas asistencialistas buscarán ganar cierta legitimidad y publicidad entre las comunidades y la política social (educación, salud, servicios sociales) queda en última instancia definida por el capital financiero que encuentra en la administración Uribe su más fiel aliado para consolidar sus intereses⁷⁷.

Las anteriores directrices se alimentan también de un tipo de análisis y lectura de la realidad. Así, el departamento del Chocó es considerado como un escenario de conflicto entre los actores ilegales, especialmente como punto estratégico para los paramilitares y la guerrilla para el negocio de la droga y el tráfico de armas, y por lo tanto, la necesidad de la recuperación del orden público y el monopolio de la fuerza es la única manera de mejorar la institucionalidad y la política social del Estado. Sin desconocer que el narcotráfico y el tráfico de armas juegan un papel importante en la región, visiones como ésta ocultan el verdadero origen y causa del conflicto. El conflicto en el Chocó se sustenta en la histórica violencia estructural, en el enorme potencial en recursos naturales, en la implantación de políticas neoliberales o de apertura económica de grandes poderes económicos y empresas transnacionales, y en la ausencia total de políticas serias que intenten paliar las condiciones de inequidad social y cultural.

⁷⁷ Para más información consultar los documentos de debate previos y las conclusiones finales de la Pre-Mesa de donantes, celebrada el 10 de julio en Londres, que define los lineamientos de la cooperación de Europa al gobierno de Colombia a través de su Plan Nacional de Desarrollo⁷⁷.



“Una cooperación que no incida en lo político nos desintegra y desmoviliza”

La confluencia de diversas culturas y de etnias en el departamento del Chocó ha generado modelos y planes de vida ajustados a sus ritmos y esquemas creados a partir de sus propios sistemas culturales, de sus definiciones de la tierra y de la relación con el entorno natural y espiritual. Por eso es importante que los organismos nacionales e internacionales que trabajan en el departamento del Chocó, entiendan y respeten las necesidades y las dinámicas culturales, sociales y económicas, con el fin de no violentar la cultura o los procesos de las mismas comunidades.

La situación del departamento del Chocó tiene urgencia de un trabajo con mayor engranaje entre las organizaciones, tanto nacionales como internacionales; con el fin presionar al Estado para que cumpla con sus compromisos nacionales e internacionales, y de realizar acciones que se enfoquen a lograr cambios en la situación estructural de la región. Independientemente de los perfiles de cada organización, éstas deben acortar las distancias que existen entre ellas, y más que en perfiles y procedencias se deberían concentrar en los objetivos comunes que tienen, en cómo fortalecerlos buscando generar mayor eficacia en sus proyectos y mejores resultados. Desafortunadamente, los proyectos importantes a largo plazo, generalmente pierden fuerza tanto por las debilidades organizativas de las comunidades y organizaciones, como por la falta de seguimiento y de una adecuada coordinación entre las comunidades y organizaciones de base con los organismos nacionales e internacionales.

El seguimiento al trabajo de las organizaciones y otras entidades nacionales e internacionales en el Chocó, y especialmente tras los sucesos de Bojayá, pone de manifiesto una serie de constantes, que tienden a debilitar su trabajo y a crear bases que pueden llevar a la desestructuración de los tejidos sociales y étnicos en el Chocó. La tendencia hacia la coyunturalidad frente a la estructuralidad que termina discriminando a parte de la población y creando bases de conflicto interno, el paternalismo, el asistencialismo; la asunción de responsabilidades de Estado, evitando la exigibilidad de sus

deberes con la población; la corresponsabilidad, silencio cómplice o inercia frente al posicionamiento de modelos de violencia en la estructura social, económica y cultural de las comunidades; la estigmatización de procesos contrarios; la presión para la implantación de proyectos, la priorización en el sostenimiento de la misma organización, y la falta de consulta con las comunidades son algunas de las pautas mantenidas.

Un dirigente de la ACIA expresa con crudo realismo lo que están sintiendo los pobladores: *“a nosotros nos preocupa, cómo en términos de atender a la población civil, las diferentes instituciones e incluso algunas ONG, se viene planteando la atención, única y exclusivamente, a la población desplazada. Queriendo decir con esto que quien no se desplaza, no tiene derecho a un mínimo de servicios, porque así lo exigen las políticas que tienen planteadas dentro de su estamento. Pero esta situación, de verdad, que es preocupante para nosotros, debido a que discrimina, dentro de las mismas comunidades, muchas familias, y eso nos está trayendo muchos choques internos y que tiende a desarticular nuestro proceso organizativo. También es preocupante para nosotros cómo poco a poco se ha ido ocultando la responsabilidad de las diferentes instituciones, debido a la intervención de las ONG y los Organismo Internacionales, ya que si hacemos un análisis de los apoyos que hemos tenido como organización y, específicamente, en las diferentes comunidades, en un 70% ha sido por parte de las ONG y los Organismo Internacionales. La responsabilidad de las diferentes instituciones, las ONG y los Organismo Internacionales, irían como a*



*complementar, pero no podrían ser para sustituir a las instituciones porque es su responsabilidad como tal*⁷⁸.

Por lo general, los agentes externos de cooperación desconocen los procesos sociales que están en marcha en la región. *“Se hacen decir independientes, pero la independencia no puede llevar a desconocer los procesos que existan en la zona. Tampoco tienen conciencia crítica de la realidad que se está viviendo. No tienen coherencia política en lo que tienen que hacer. Están acomodándose a las circunstancias, o donde les permitan que se muevan. Y eso a qué los lleva?, a que en determinado momento sean juzgados por unos o por otros. Y en este momento, el conflicto colombiano, ya como está de grave en el Chocó, si se pretende colocar personas en entidades que presten servicios humanitarios, deben ser personas con una claridad política muy definida y que no dependan de las directrices que les dé el Estado y mucho menos, o que tampoco estén dependiendo de que les permitan (un grupo u otro) o no, actuar; porque para nosotros es mucho más coherente y es mucho más claro a nivel político, que un organismo porque se siente amenazado, no actúe en una zona y así lo diga, a que por querer actuar se someta a las presiones o a las condiciones que les ponga un actor. Porque entonces, ¿cuál es su función?: ¿colaborar al actor o hacer lo que el actor diga, o trabajar con la gente y hacer lo que la gente diga?”*⁷⁹.

No se fortalecen los procesos locales: *“es necesario entrar a coordinar con*

*la gente lo local y de que eso que de afuera venga hacia acá, realmente, es a sumarse y a fortalecer los procesos locales; ahí en ese sentido sí es grave. Y desgraciadamente muchos funcionarios creen que vienen del cielo con la verdad revelada y que la atención la hacen es como ellos lo van hacer y ahí es donde se dan choques con lo local, con los procesos en lo local y en vez de sumarse, de fortalecer, generan divisiones y eso en vez de ayudar, pues, ahonda el problema”*⁸⁰.

Frente a las iniciativas de posibles acuerdos humanitarios para la región, esto piensa un miembro de una ONG: *“para que eso se dé, realmente, tiene que ser un proceso muy desde abajo, y que se dé para las comunidades, mas no decir que con esto se van a llegar a acuerdos con la guerrilla, con los paramilitares, con la fuerza pública. El Gobierno nacional tendría que respaldar esa decisión de la comunidad para llegar a un acuerdo humanitario, precisamente, tiene toda una posición abierta frente a la guerra, precisamente, el acuerdo humanitario le vale un huevo y mucho menos en lo local y mucho menos en una región como el Chocó. La propuesta final la trabajó una ONG, muy bien, desde Bogotá. Eso no se ha trabajado en los contextos comunitarios del Medio Atrato y si no se han trabajado en los del Medio Atrato, en lo que tendríamos que gastarnos y desgastarnos sería en fortalecer a las comunidades internamente; en generar mecanismos de control, internos, para que los muchachos no se vinculen a los grupos armados, para que los muchachos no se vinculen a las siembras de los cultivos ilícitos (...). Lograr que las comunidades se fortalezcan para que no sean permeadas por grupos armados. Y ahí estamos avanzando en los acuerdos humanitarios, que en ponernos a armar documentos, propuestas de que nos vamos a ir a negociar con la gente, cuando en lo local, están haciendo otros acuerdos. En este momento hay una cosa más importante y es el acompañamiento a los propios procesos de las comunidades”*⁸¹.

Se reclama un papel más activo de la ONU: *“Además de la buena fe de los organismos internacionales, yo lo que digo es que la ONU con sus diferentes ramas que*

⁷⁸ Intervención de un dirigente de la ACIA, en el Panel sobre Bojayá, Universidad Nacional, 10 de diciembre de 2002.

⁷⁹ Entrevista a un líder comunitario de la región, 24 de junio de 2003.

⁸⁰ Entrevista a un miembro de agencia internacional en Quibdó. 23 de junio de 2003.

⁸¹ Entrevista a miembro de una ONG en Quibdó. 23 de junio de 2003.



tiene, debe presionar más a la estructura del Estado como tal, porque desde lo puntual, maravilloso, desde lo puntual; pero desde lo estructural estamos jodidos porque, pues nosotros sabemos que el país tiene sus leyes y que todos, quien llegue debe cumplirlas; pero también debe haber una mirada sobre esas leyes, de corte internacional”⁸².

En este marco, es importante resaltar que para lograr cambios estructurales en el departamento del Chocó, es necesario apoyar y fortalecer a las organizaciones locales ya que ellas tienen que ser las encargadas de perpetuar las bases sociales que han construido y de marcar el rumbo hacia dónde quieren dirigir a su región. Mantener el apoyo a las comunidades negras, indígenas y mestizas en la defensa de su autonomía, la defensa del territorio y la elaboración e implementación de sus planes de vida y etno-desarrollo, en la búsqueda de la justicia social y de la reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Y abrir espacios ante el Gobierno nacional y otras entidades estatales e internacionales, para que las organizaciones étnico-territoriales puedan plantear su problemática e inquietudes, junto con las exigencias al Gobierno colombiano de que cumpla sus funciones como Estado Social de Derecho, han de convertirse en la base donde sustentarse las políticas de cooperación nacional e internacional.

En esta dirección, las organizaciones sociales de la región y la diócesis de Quibdó, plantearon con claridad a la comunidad internacional el apoyo requerido:

- “Solicitamos al Cuerpo Diplomático de los países miembros y asociados de la Unión Europea acreditados ante el Gobierno Colombiano el apoyo político para continuar nuestra labor de acompañamiento y defensa de los procesos organizativos de las comunidades de la región.

- Apoyar la iniciativa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para lograr un urgente acuerdo humanitario entre las partes en conflicto.

- Apoyar el trabajo de la Misión de investigación a los municipios de Bojayá y Vigía del Fuerte, que

adelanta la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que se establezcan los hechos ocurridos, a fin de establecer responsabilidades, y hacer recomendaciones de las víctimas y sus familiares. La reparación debida a las víctimas y sus familiares no se hace a través de una promesa presidencial de reconstrucción, mientras se mantiene en absoluta impunidad a los responsables de los crímenes, lo que se traduce en la permanencia del control de actores violentos sobre la región.

- Continuar haciendo presión política sobre el gobierno colombiano e insistir para que haya depuración y transparencia de la fuerza pública en su accionar, despejando cualquier duda de omisión, connivencia o colaboración con los grupos paramilitares.

- Los hechos y agresiones que han vivido las comunidades de todo el Atrato en estos últimos seis años, nos ratifican en nuestra afirmación sobre la falta de transparencia y honestidad de la fuerza pública, que cada vez se deslegitima más ante las comunidades. La mayoría de los desplazamientos recientes de Bellavista y Vigía del Fuerte obedecen a esta situación de connivencia entre la fuerza pública y los paramilitares.

- Una de las razones por las cuales la confrontación armada se ha intensificado y degradado en nuestro país es el narcotráfico. Y a la comunidad internacional le compete también responsabilidad. Por ello les solicitamos que inviten a sus gobiernos a tomar medidas efectivas contra el consumo, el contrabando de precursores químicos, el mercado ilegal de armas y el lavado y movimiento de activos

⁸² Entrevista a Miembros del Comité 2 de Mayo y Comité de Desplazados del 2 de Mayo. Quibdó. 23 de mayo de 2003.

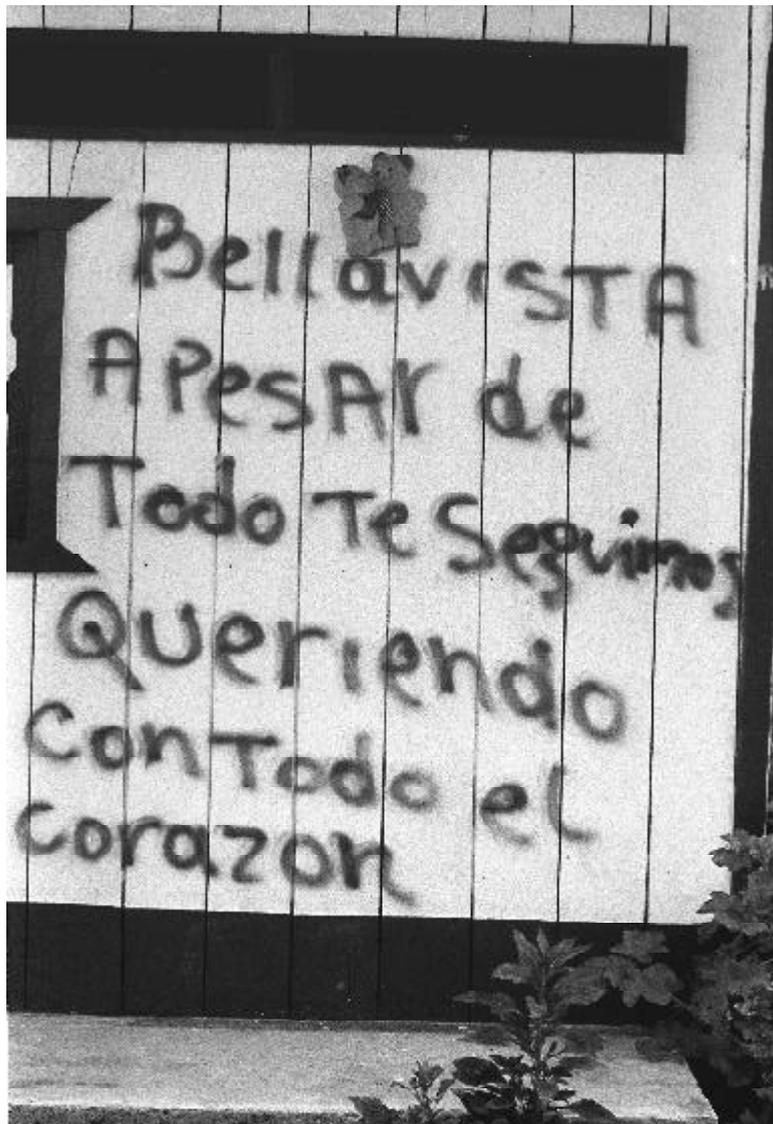


en el sistema financiero internacional.

- Revisar las inversiones y los megaproyectos que impulsan en zonas especiales de conflicto y que constituyen una amenaza contra la vida y los territorios de las comunidades. En el diseño y ejecución de estos megaproyectos,

se debe consensuar con las comunidades y respetar sus códigos de conducta sobre protección del medio ambiente y derechos colectivos.

- Continuar en la disponibilidad de favorecer los actuales y futuros procesos de diálogo, en la búsqueda de una solución política negociada al conflicto social y armado que sufre Colombia”⁸³.



Bojayá: la tragedia continúa

⁸³ Solicitudes al cuerpo Diplomático de la Unión Europea acreditado en Colombia. Diócesis de Quibdó, Apartadó e Istmina -Tadó, Cinep, Paz y Tercer Mundo, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Misioneros Claretianos, Misioneras de la Madre Laura, Misioneros del Verbo Divino, Hermanas del Divino Salvador, Hermanas Agustinas Misioneras, Centro de Pastoral Afrocolombiana Cepac-, Huellas Africanas, Quibdó, Chocó, 13 de mayo de 2002.